

## RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL

Nº 071 -2012-GR-JUNÍN/GGR

HUANCAYO, 21 FEB. 2012

**EL GERENTE GENERAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN.**

### VISTOS:

El Recurso de Apelación interpuesto por **MILQUIADES FELIX SANCHEZ INGA**, contra la Resolución Directoral Administrativa Nº 592-2011-GR-JUNIN/ORAF de fecha 29 de diciembre de 2011; y el Informe Legal Nº 140-2012-GRJ/ORAJ de fecha 16 de febrero de 2012, suscrito por la Directora de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; y,

### CONSIDERANDO:

Que, con fecha 16 de setiembre del 2010, el Director Regional de Control Institucional del Gobierno Regional de Junín, Ing. Hilario Felipe Bravo Pinto, mediante Oficio Nº 404-2010-GRJ/ORCI, comunica a la Presidencia del Gobierno Regional de Junín, que en la realización de una acción de control, la Comisión Especial encargada al solicitar información, ha podido evidenciar que el servidor nombrado Milquiades Félix Sánchez Inga, quien labora en la Oficina Zonal de Satipo, suscribe documentación oficial, identificándose como Ingeniero, sin indicar la especialidad a la que pertenece.

Que, por ello, el citado Director solicitó información a la Sub Dirección de Recursos Humanos de la entidad, verificándose en su legajo personal, que ostenta el grado académico de bachiller en Ingeniería de Mecánica de Fluidos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Peticionada la información a la Universidad, informó que no cuenta con el título profesional, lo que implica la vulneración de las Leyes Nros. 28858 y 16053. En consecuencia, el acotado Director de la Oficina Regional de Control Institucional, peticona se adopten las acciones correspondientes a la brevedad.

Que, con fecha 20 de noviembre del 2010, el Jefe Zonal de Satipo, con el Reporte Nº 613-2010.GRJ-OZS, remite el cargo de la notificación del servidor nombrado Milquiades Félix Sánchez Inga, para que responda sobre su título profesional, el oficio del Colegio de Ingenieros de Junín, que indica la inexistencia de un registro a nombre del citado servidor y documentos oficiales varios en los cuales firma como Ingeniero.

Que, por ello, con Resolución Directoral Administrativa Nº 313-2011-GR-JUNIN/ORAF de fecha 05 de agosto de 2011, se instauró proceso administrativo disciplinario al servidor nombrado Milquiades Félix Sánchez Inga. Tramitado, conforme a su naturaleza, el proceso disciplinario administrativo, habiendo ejercido el procesado su derecho a la defensa, con fecha 29 de diciembre de 2011, la Dirección Regional de Administración y Finanzas, mediante Resolución Directoral Administrativa Nº 592-2011-GR-JUNIN/ORAF, impuso la sanción de suspensión por el plazo de 15 días al procesado; la misma que fue notificada el 10 de enero del 2012.





Gerencia General

*Trabajando con la fuerza del pueblo!*

Que, el servidor sancionado, con fecha 16 de enero del 2012, interpone recurso de apelación contra la resolución que lo sanciona, por considerar que ésta es injusta.

Que, conforme a lo establecido por el Art. 207° de la Ley N° 27444, el recurso impugnatorio de apelación debe ser interpuesto en el plazo de 15 días luego de notificado. En el presente caso, de la copia de la resolución impugnada, aparece como fecha de notificación el 04 de enero del 2012, por lo que en aplicación del principio de presunción de veracidad al cual hace referencia el numeral 1.7 del Art. IV del Título Preliminar de la citada Ley, debe tenerse por cierta dicha fecha; consecuentemente el recurso ha sido presentado dentro del plazo legal.

Que, el Art. 211° de la misma Ley, exige que el recurso impugnatorio de apelación, debe indicar el acto del cual recurre, ser autorizado por letrado y cumplir los otros requisitos formales exigidos por el Art. 113 de la misma norma. Revisado el mismo, se concluye que cumple con los requisitos de forma exigidos por la Ley administrativa.

Que, señala la apelante que conforme la suspensión de 15 días le causa agravio, pues la remuneración que percibe, es el único ingreso con el que cuenta para afrontar sus responsabilidades familiares, así como que no se ha valorado debidamente la gravedad de la falta cometida, las circunstancias en las que se cometieron los hechos, la concurrencia de faltas, el grado de su participación, la reincidencia y su nivel de carrera

Que, el Art. 66° del D. S. N° 005-90-PCM, establece que la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios tiene la facultad de calificar las denuncias que le sean remitidas y pronunciarse sobre la procedencia de abrir proceso administrativo disciplinario. En caso de no proceder este elevará lo actuado al titular de la entidad con los fundamentos de su pronunciamiento, para los fines del caso. En este mismo orden de ideas, su Art. 170° dispone que la Comisión hará las investigaciones del caso, solicitando los informes respectivos examinará las pruebas que se presenten y elevará un informe al titular de la entidad recomendando las sanciones que sean de aplicación. Es prerrogativa del titular de la Entidad determinar el tipo de sanción a aplicarse.

Que, haciendo una interpretación teleológica de la norma, se puede concluir que el espíritu de la norma es separar las facultades de la Comisión que hará la investigación administrativa y propondrá una sanción o absolución, de las facultades del funcionario que estará encargado de tomar la decisión al respecto; de manera que un órgano es investigador y proponente, y el otro decisorio.

Que, como es de verse del Informe Técnico N° 010-2011-GRJ-CPPAD, la Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios a cargo del proceso, estaba bajo la Presidencia del CPC. Luis Salvatierra Rodríguez, quien a su vez es el mismo funcionario que emite la resolución de sanción impugnada; produciéndose en consecuencia la incompatibilidad antes descrita, pues al emitir el Informe Final, ya contaba con una opinión formada, lo que lo imposibilitaba de analizar objetivamente, la propuesta de la Comisión, sus conclusiones y decidir aplicando los principios de racionalidad y proporcionalidad.

Que, siendo así, debe invocarse el Art. 10° numeral 3 de la Ley N° 27444, que establece que son vicios que generan la nulidad del acto administrativo de pleno



**Gerencia General**

derecho los actos expresos que son contrarios al ordenamiento jurídico, cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o tramites esenciales para su adquisición.

Que, por ello, debe invocarse el Art. 202° de la misma Ley N° 27444 y declararse la nulidad de oficio de la Resolución Directoral Administrativa N° 593-2011-GR-JUNIN-ORAF, por agravarse el interés público y el debido procedimiento administrativo, para lo cual el superior jerárquico, debe emitir el correspondiente acto resolutivo.

Que, conforme a la Resolución Ejecutiva Regional N° 427-2011-GR-JUNIN/PR, la Presidencia del Gobierno Regional de Junín, ha delegado su facultad sancionadora disciplinaria que como titular de la entidad tiene, en el Director de la Oficina Regional de Administración y Finanzas; funcionario que como ya se ha sostenido, se encuentra impedido de emitir pronunciamiento en el presente caso; debiendo en consecuencia, autorizarse vía acto resolutivo al Gerente General Regional para emitir pronunciamiento al respecto.


Que, en uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 427-2011-GR-JUNIN/PR de fecha 20 de junio de 2011, artículo 26° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.-** Declarar **Nulo de Oficio** la Resolución Directoral Administrativa N° 592-2011-GR-JUNIN-ORAF y por ende, carece de objeto pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por **Milquiades Félix Sánchez Inga**, por las consideraciones expuestas.

**ARTICULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** copia de la presente resolución, al interesado, Dirección Regional de Administración y Finanzas y demás órganos competentes del Gobierno Regional Junín.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
C.P.C. HENRY LÓPEZ CANTORÍN  
GERENTE GENERAL  
GOBIERNO REGIONAL JUNIN